



NUE 176-A-2016 (YC)

contra Presidencia de la República (PR)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con treinta y siete minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte.

Descripción del caso:

I. El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por [REDACTED] y [REDACTED], -en adelante los apelantes-, en contra de la resolución 118-2016 emitida por el oficial de información de la **Presidencia de la República**, el día 6 de junio de 2016.

Los apelantes solicitaron la siguiente información: 1) informe sobre la misión o diligencias oficiales en las que se utilizó el vehículo oficial placas P-434-679 durante el periodo comprendido del 28 de febrero al 2 de marzo del año 2015; 2) Informe sobre la misión o diligencias oficiales en las que se utilizó el vehículo oficial placas P-19-966 durante el periodo comprendido del 29 de abril al 2 de mayo del año 2016; 3) Informe sobre el Departamento o Área institucional, nombre del funcionario o persona responsable a la que están asignados los vehículos oficiales placas P-19-966 y P-434-679; 4) Copia de las bitácoras del vehículo oficial P-434-679 durante el periodo comprendido del 28 de febrero al 2 de marzo del año 2015; y 5) Copia de la bitácora del vehículo oficial placas P-19-966 de los días comprendidos desde el 29 de abril al 2 de mayo de 2016.

Al respecto, el oficial de información de la Presidencia de la República resolvió: "1) *entregar la información relacionada al vehículo con placas P-434-679 en las fechas requeridas. Dicho bien mueble se encontraba asignado a la Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones, específicamente al señor Marlon Medina, Jefe de Transporte de dicho ente administrativo; asimismo se remitió copia de la bitácora de uso de dicho vehículo para los periodos comprendidos por los solicitantes; y 2) Denegar la información relacionada al*



vehículo con número de placas P-19-966, por encontrarse reservada con base al acto administrativo emitido por el secretario privado de la Presidencia de la República, de fecha 3 de junio de 2016, en el cual se declaró en reserva el registro institucional de bienes asignados al Estado Mayor Presidencial, cuya justificación versa en las excepciones dispuestas en las letras b) y d) del Art. 19 de la LAIP. En relación a las bitácoras de uso del vehículo en mención, estas no fueron generadas por la institución.”.

Al respecto, los apelantes expresaron su inconformidad en el sentido que al revisar el índice de reserva de fecha 26 de mayo de 2016, proporcionado por la Presidencia de la República, constataron que las reservas de dicha información ya habían vencido, debido a que en dicho índice actualizado al mes de diciembre de 2015, específicamente en los ítems 2.3 reserva 003-SP-2012 y 2.4 004-SP-2012 fueron establecidas para un plazo de 4 años; por lo que la información solicitada ya se encontraba disponible y pública para la ciudadanía. Por lo que, en base al principio de seguridad jurídica, siendo la base de este la “certeza jurídica”, ya que no se les había informado en la resolución sobre este índice del mes de diciembre de 2015; además, en este no se menciona qué disposición legal se realizó en ese momento y cuál es el número de declaratoria de reserva a la que se está haciendo alusión.

De igual forma, los apelantes no estuvieron de acuerdo con las disposiciones legales citadas en la declaratoria entregada en la resolución del oficial de información, es decir, el Art. 19 letra “b” que cita *la que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública; y la letra “d” la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona*, ya que según los apelantes se estaría aceptando con ello que la vida y seguridad de toda la población correría riesgo, o es de suponer que esta reserva tiene como objeto proteger la vida del funcionario al que se le asigna el vehículo, por lo que si la afirmación es correcta, la reserva puede ser un obstáculo para el control ciudadano sobre el uso de los bienes públicos y actuación de los funcionarios públicos; por ello, argumentar que la reserva se justifica bajo la premisa de la seguridad nacional agravan el riesgo que se produzca comportamientos ilícitos, corruptos o fraudulentos y que tales no sean descubiertos.

II. No obstante, previo a pronunciarse sobre la admisión del presente procedimiento, en auto de fecha 13 de julio de 2016, este Instituto hizo una valoración de índole procesal con respecto a un hecho público ocurrido el 1º de mayo de ese mismo año, en el cual se vio

involucrado el vehículo con número de placas P-19-966 y que medios de comunicación dieron la cobertura.

En este sentido, dicho hecho ocurrido fue investigado por la Fiscalía General de la República, quien inició las diligencias de investigación respectivas ordenando la incautación de libros de registro de la **Presidencia de la República**, que tenían relación con la información solicitada por los apelantes. En consecuencia, este Instituto decretó la prejudicialidad de la acción y ordenó la suspensión de las actuaciones de este procedimiento, sobre el hecho –con apariencia de delito- que guarda relación directa con la información solicitada y que fue objeto de investigación en sede del Ministerio Público. De igual forma, se libró oficio a la Fiscalía General de la República para que informara este Instituto sobre la finalización de las diligencias de investigación.

Posteriormente, mediante auto emitido el 6 de febrero, este Instituto se pronunció respecto al oficio remitido por el Fiscal General de la República en funciones, el día 26 de octubre de 2018; en ese mismo auto, este Instituto libró oficio a los Juzgados de Paz de la Libertad para conocer sobre la causa 224-2006-IEEM y al Juzgado de Sentencia de Santa Tecla en relación a la referencia -56-32017, a efecto de conocer el estado de los respectivos procesos. Adicionalmente, el anterior Comisionado Presidente en funciones de este Instituto, Hernán Alexander Gómez Rodríguez, presentó escrito a los juzgados antes relacionados, reiterando en la necesidad de conocer el estado de los casos descritos.

El 28 de febrero de 2019, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, presentó oficio No. 762 en relación al estado del proceso penal con referencia 56-3-2917, en el que se detalla lo siguiente: 1) Que según consta en folios 446 a 466 del expediente judicial se dictó sentencia condenatoria el día 2 de marzo de 2017, sobre el procesado en la cual fue condenado a cumplir la pena de cinco años de prisión por el delito de fraude procesal, en perjuicio de la Administración de Justicia; 2) Consta en el expediente judicial fs. 479 a 491, recurso de apelación interpuesto por el procesado; de fs. 512 a 531 consta el recurso de apelación interpuesto por los licenciados Carlos Humberto Escobar y José Lito Castillo López; de fs. 532 a 544 consta el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ana Margarita Chacón y de fs. 549 a 550 consta el escrito por medio del cual la representación fiscal contesta los recursos ; 3) Que el 4 de mayo de 2017 mediante oficio 4830, fue remitido



a la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de esta ciudad, el proceso penal con referencia 56-3-2017, a efecto que se le diera trámite de ley correspondiente a los recursos de apelación interpuestos; 4) El día 14 de febrero de 2019, mediante oficio número 125 suscrito por el secretario de la Cámara Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, fue remitido nuevamente el proceso penal con referencia 56-3-2017, en el cual la Cámara confirma la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

Sin embargo, en la resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió modificar la sentencia del Tribunal en mención únicamente en cuanto a la pena de cinco años de prisión interpuesta por el delito de fraude procesal, en perjuicio de la Administración de Justicia, por la pena de dos años con seis meses, pena que a su vez, se la reemplazó por el trabajo de utilidad pública. En virtud de lo anterior, el entonces procesado se encuentra en libertad; 5) Que según consta en fs. 634 en el auto de las ocho horas con quince minutos del día quince de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró ejecutoriada o firme la sentencia condenatoria dictada contra el procesado, por el delito de fraude procesal, en perjuicio de la Administración de Justicia y a partir de esa fecha el ciudadano pasó a la orden y disposición del Juzgado 2º de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución a de la Pena de San Tecla.

Bajo esa línea, el 19 de marzo de 2019, el Juzgado de Paz de la Libertad mediante oficio No. 224-16-IEEM, expresó que en el proceso penal con referencia 224-16-IEEM, se dictó Sobreseimiento Definitivo, como lo establece el Art. 350 del Código Procesal Penal.

En virtud de lo antes descrito, se evidenció que ya no existía un proceso judicial pendiente que justifique el mantenimiento de la figura de la prejudicialidad que regula el Art. 48 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM); en tal razón, se estableció por medio de los oficios No. 762 y 224-16-IEEM, que la persona que fue procesada se encuentra en libertad comprobando con ello que ya no existe la figura de prejudicialidad a la que hace alusión el citado artículo; por lo que, además se concluyó que la información concerniente al presente proceso ya no es se encuentra en diligencias de investigación.

II. Luego de lo anterior, este Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada Olga Noemy Chacón de Hernández para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.



No obstante, debido la finalización del período de su nombramiento el 10 de febrero del presente año, se designó al comisionado que fue nombrado en esa misma fecha, **Juan Carlos Rodríguez Turcios**, por parte del gremio de periodistas, para que diera continuidad al presente procedimiento. Sin embargo, debido a la renuncia realizada por él en fecha 12 de febrero de este año, el Pleno de Comisionados designó a la Comisionada **Yanira del Carmen Cortez Estévez**.

III. En plena observancia y respeto al Derecho de Defensa y Audiencia que debe imperar en todo procedimiento administrativo, de conformidad con el Art. 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se corrió traslado a la **Presidencia de la República** para que rindiera su informe justificativo.

En el referido informe de defensa, el ente obligado mencionó en cuanto a la información relacionada al informe sobre la misión o diligencias oficiales en las que se utilizó el vehículo oficial placas P-19-966; y al informe sobre el Departamento o Área institucional, nombre del funcionario o personas responsables a la que están asignados los vehículos oficiales placa P-19-966 indicó que existe una declaratoria de reserva en base al Art. 19 letras b), d) y h) por el motivo que esta información puede afectar la defensa nacional, la seguridad pública, la vida, la seguridad o la salud o genere una ventaja indebida hacia un tercero, para este caso, la del Presidente de la República.

En este sentido, manifestó que las actividades de logística, seguridad y transporte de los mandatarios y demás funcionarios tienen un *plus* de legitimidad que faculta su secreto, en función de que la divulgación de las mismas permitiría conocer las formas y medios por los cuales se transportan dichas personas y funcionarios, en perjuicio de su seguridad personal e integridad física.

Por otra parte, en cuanto a la información relativa a la bitácora del vehículo oficial placas P-19-966 durante los días desde el 29 de abril al 2 de mayo de 2016, el apoderado manifestó que es información inexistente en virtud de no haber sido generado por esa entidad, relacionando el memorando de referencia MEMO/GA/162/2016 de fecha 3 de junio de 2016 y que se encuentra incorporado al expediente administrativo de la solicitud de información.



IV. El 21 de enero del presente año, se realizó la audiencia oral únicamente con la presencia de los apoderados del ente obligado.

En cuanto a los alegatos brindados por dichos apoderados –en lo medular- señalaron que hay una declaratoria de reserva que fue emitida en su oportunidad habiendo 2 momentos de dicha declaratoria: la primera que fue para 4 años que finalizó en mayo de 2016; y la segunda para ampliar nuevamente la reserva por 7 años, que vencerá en el año 2023. Asimismo manifestó que con dichas reservas se pretende proteger bienes jurídicos constitucionales, que están previstos como excepciones al principio de máxima publicidad. De igual forma, se ha buscado resguardar los bienes jurídicos como la salud, seguridad, integridad física y psíquica de las personas que usan los vehículos presidenciales, por lo que dicha reserva responde a salvaguardar dichos derechos.

Por lo tanto, ratificaron todo lo actuado por el oficial de información, ya que dicha reserva se mantiene hasta esa misma fecha, cumpliendo con todo lo establecido en la ley y las causales y motivos pertinentes para ser considerada como tal. Finalmente, solicitan que este Instituto ratifique todo lo actuado por el oficial de información y se confirme dicha reserva.

Análisis del caso

Previo a iniciar el presente análisis del caso, este Instituto tiene a bien indicar que el acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn); sin embargo, este tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión, regulado en el artículo 6 de la Cn. Asimismo, este derecho comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan *interés público*.

De igual forma, se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a la información en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

En este sentido, este Instituto delimita el presente objeto de controversia a la información relativa a: 1) el Informe sobre la misión o diligencias oficiales en las que se utilizó el vehículo oficial placas P-19-966 durante el periodo comprendido del 29 de abril al 2 de mayo del año 2016; 2) Informe sobre el Departamento o Área institucional, nombre del funcionario o persona responsable a la que estaban asignados los vehículos oficiales placas P-19-966; y 3) Copia de la bitácora del vehículo oficial placas P-19-966 de los días comprendidos desde el 29 de abril al 2 de mayo de 2016.

En consecuencia, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **I)** Consideraciones con respecto al principio de máxima divulgación y sus efectos; **II)** Examen sobre el cumplimiento de requisitos de la declaratoria de reserva y consideraciones al respecto del interés público e interés privado; y **III)** Consideraciones con respecto a la inexistencia de la información y su aplicación en el presente caso.

I) El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el Sistema Interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones”².

El Art. 4 letra “a” de la LAIP, establece el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones.

¹ Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

² CJI/RES. 147 (LXXIII: O/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI_RES_147_LXXIII_O_08.p



En ese orden de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la CIDH se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los tres efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son: a) El derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) La carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) Preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación.⁷

II) Habiendo delimitado lo anterior, parte del objeto de controversia del presente caso se delimita en la declaratoria de reserva respecto de las misiones oficiales y las personas a las que les fue asignado el vehículo con placas P-19-966.

Al respecto, este Instituto ha sostenido que si bien es cierto el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, puesto que es susceptible de restricciones que condicionan su pleno ejercicio, tales restricciones no pueden ser arbitrarias, sino que deben estar previamente establecidas por el legislador, de esta manera se previene que la administración pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información que solicitan los ciudadanos.

³ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Ídem.

⁷ Ídem.

En ese contexto, una de las excepciones al principio de máxima publicidad⁸ es la **información reservada**, la cual se define como aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con la LAIP—específicamente en el Art. 19 de la LAIP—, en razón de un interés general durante un periodo determinado y por causas justificadas, según lo establecido en el Art. 6 letra “e” de la LAIP.

En este sentido, este Instituto ha sostenido reiteradamente que para la validez de una declaración de reserva se necesita la concurrencia de tres caracteres o requisitos: (a) legalidad, (b) razonabilidad y (c) temporalidad; y que ante la ausencia de uno de ellos debe desclasificarse la información.

(a) **Legalidad.** La facultad que tienen las autoridades para reservar cierta información debe enmarcarse en el ordenamiento legal vigente, a fin de garantizar que los límites al ejercicio del DAIP estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia.

(b) **Razonabilidad.** Es necesario que se razone y fundamente la adopción de esta limitación, pues con ello se busca reducir la arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios con potestad para declarar la clasificación de la información pública como reservada. En esencia, no basta con enunciar los motivos que conllevan al ente obligado a declarar la reserva, sino que tales argumentos deben ser jurídicamente válidos, en la medida que no se establezca un límite arbitrario al DAIP.

(c) **Temporalidad.** Se refiere a que la restricción del acceso a la información debe estar sujeta a un plazo definido, establecido en el Arts. 20 de la LAIP y 31 letra “f” de la RELAIP; y es que, si no se establece el plazo de reserva podría vulnerarse el DAIP de las personas, al generar incertidumbre sobre el momento en que la información estará a su disposición.

En este sentido, en cuanto al criterio de legalidad y razonabilidad, para que se cumpla con este requisito no basta la mera invocación de la causal en que se fundamenta la

⁸ La información en poder de los entes obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. (Art. 4 letra a) de la LAIP)



declaratoria de reserva sino que, también, es indispensable acreditar que se cumple con las condiciones necesarias para su aplicación, es decir, que los hechos y circunstancias del caso se ajustan a lo previsto por la ley.

Uno de los argumentos expuestos por la **Presidencia de la República** de los motivos de la declaratoria de reserva es que se basa en el Art. 19 letras b), d) y h) de la LAIP argumentando que esta información puede afectar la defensa nacional, la seguridad pública, la vida, la seguridad o la salud o genere una ventaja indebida hacia un tercero.

En este punto, es pertinente mencionar que un elemento importante que se debe tomar en cuenta es el **interés público**, por contraposición a la mera curiosidad ajena, es el único elemento que justifica la exigencia de que se acepten intromisiones ocasionadas por la libertad de información en el derecho a la intimidad y en la vida privada de las personas⁹.

Hace al “interés público” la importancia social de lo que se quiere comunicar y lo que se recibe, en aras de formar un verdadero discurso plural del que participen todas las voces. Es la trascendencia del hecho que se comunica. La relevancia pública de una información contribuye, junto con la veracidad, a situar en una posición estratégica frente a los derechos de la personalidad.

En línea con el presente caso, la información referente a los Informe sobre misiones o diligencias oficiales, debe considerarse que los mismos ya fueron hechos pasados y, además, que el solicitante los requirió en un periodo determinado -del 29 de abril al 2 de mayo del año 2016-; por lo que a consideración de este Instituto dicha información que debe de ser del conocimiento público de las personas, ya que los ciudadanos ejercen contraloría hacia la administración pública y por ende, existe un interés en la población de conocer el quehacer de los funcionarios públicos, siempre y cuando esté dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones.

De igual forma, cabe mencionar que en el índice de información reservada de la **Presidencia de la República** se observa que se encuentra reservado lo referente a: *Registro institucional de bienes asignados al Estado Mayor Presidencial, utilizados para todas las*

⁹ cfr. BASTERRA, Marcela I., Derecho a la información vs. Derecho a la intimidad, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2012, pág. 111

*actividades relativas a sus responsabilidades; y de igual forma: Información y documentación relativa a los siguientes datos: Placas, marca, color, chasis VIN y número de motor, contenidas en las solicitudes de autorización realizadas a la Presidencia de la República, para la asignación de placas tipo "P" a los vehículos estatales, la autorización de las placas de los vehículos tramitadas en esta Secretaría, asignados a miembros del Órgano Ejecutivo y demás instituciones autorizadas por esta Presidencia, de acuerdo al inciso final del artículo 18 de la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, número de vehículos asignados a funcionarios y servidores de la Presidencia. Información relativa a las características de todos los vehículos, contenidas en la tarjeta de circulación, sean estos placas, N, P, M. o cualquier otro tipo, siempre que estén asignados a diferentes funcionarios y/o servidores públicos para el desempeño de sus funciones en la Presidencia de la República. En consecuencia, no hay razón no fundamentación alguna para denegar a los ciudadanos la información referente al “*informe sobre la misión o diligencias oficiales en las que se utilizó el vehículo oficial placas P-19-966 durante el periodo comprendido del 29 de abril al 2 de mayo del año 2016.*”*

Ahora bien, con relación a la información referente al “*informe sobre el Departamento o Área institucional, nombre del funcionario o persona responsable a la que estaban asignados los vehículos oficiales placas P-19-966.*””, es importante tener en cuenta a las llamadas “*personas políticamente expuestas –PEPs–*” que son los funcionarios públicos de alta jerarquía. Con base al Art. 9-B De la Ley de Lavado de Dinero y Otros Activos, son los sujetos que están comprendidos en los Arts. 236 y 239 de la Constitución de la República (CP), Art. 2 literales “a”, “b” y “c” y Art. 52 de la por Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. siendo para este caso: Presidente y Vicepresidente de la República y los designados a la **Presidencia de la República.**

En este sentido, puede considerarse que estas personas tienen un mayor riesgo a comparación de los demás funcionarios y servidores públicos debido a dicho cargo que ostentan. Asimismo, revelar dicha información supondría un riesgo a la vida de estas personas, ya que son más susceptibles a hechos criminales que se pudieran presentar en un futuro.



Dicho lo anterior y con el propósito de garantizar los derechos constitucionales de estos funcionarios, este Instituto determina elementos suficientes para dar lugar a la reserva planteada por la **Presidencia de la República**. No obstante lo anterior y en aras de garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos establecido en el Art. 2 de la LAIP, dado que la información solicitada es del año 2016 y no es posible determinar si en efecto ese vehículo estaba asignado a las llamadas “Personas Expuestas Políticamente” es procedente que este Instituto requiera al ente obligado que determine a quién estaba asignado el vehículo con placas P-19-966, en el periodo que los solicitantes requirieron dicha información. Si se comprobara que dicho vehículo no estaba asignado a estas personas mencionadas anteriormente, el ente obligado deberá entregar dicha información a los solicitantes, ya que estas personas no entran en este rango y se deberá satisfacer el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

III. Ahora bien, en cuanto a la declaratoria de inexistencia de la información relacionada a la bitácora del vehículo con placas P-19-966, este Instituto hace las siguientes consideraciones:

De acuerdo a lo establecido en el Art. 73 de la LAIP, cuando la información solicitada que no se encuentre en los archivos de la unidad administrativa correspondiente, el oficial de información tomará las medidas pertinentes para localizarla en la dependencia correspondiente, y en caso de no encontrarla, expedirá una resolución que confirme su inexistencia.

El propósito de la resolución es que dicho servidor emita una declaratoria en la cual confirme en su caso, la inexistencia de la información solicitada, garantizando que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés y que las mismas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso en concreto; es decir, dar certeza al solicitante del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada.

En acotación a lo anterior, es atinente señalar que la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la autoridad —es decir, se trata de una cuestión de hecho—, no obstante que la dependencia o autoridad cuente con

las facultades para poseer dicha información. En este sentido, es de señalar que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada.¹⁰

Asimismo, este Instituto ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: *a) nunca se haya generado el documento respectivo; b) el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero, se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y, c) la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si esta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria*¹¹. Sin embargo, debe constar en la declaratoria de inexistencia por parte del oficial de información respecto a ello.

De igual forma, este Instituto ya ha emitido resoluciones¹² donde ha tomado como base los criterios emitidos por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), y en relación a la inexistencia de la información ha establecido que: “se deberá comprobar y motivar que la información solicitada no existe, y para ellos, se tiene que acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: i) que se hizo llegar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que, en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; ii) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; iii) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); iv) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y v) la precisión, en su caso de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley de que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería de existir en virtud de que deriva del

¹⁰ Criterio /00015-09, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de México.

¹¹ Resolución Definitiva IAIP 39-A-2013, del 28 de octubre de 2013.

¹² Resolución definitiva IAIP 143-A-2017, emitida el 11 de diciembre de 2017.



ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (ente obligado) ésta deberá generarse o reponerse en los caso que sea posible”.

No obstante a lo anterior, la inexistencia de la información decretada por los entes obligados, no deber ser utilizada como un límite al DAIP de los solicitantes de la información, pues deben probar que han realizado las diligencias necesarias para su obtención o reconstrucción y futura entrega de la información.

En línea con el presente caso, en relación a las bitácoras es pertinente señalar que en cuanto a la información relativa a la bitácora del vehículo oficial placas P-19-966 durante los días desde el 29 de abril al 2 de mayo de 2016, el apoderado manifestó que es información inexistente en virtud de no haber sido generado por esa entidad, relacionando el memorando de referencia MEMO/GA/162/2016 de fecha 3 de junio de 2016 y que se encuentra incorporado al expediente administrativo de la solicitud de información.

Sin embargo, este Instituto considera oportuno señalar que el uso de las bitácoras de los vehículos nacionales de cada Institución es importante, ya que se busca transparentar el uso que se hace de los bienes del Estado, donde se pueda documentar todo lo realizado por la Institución, funcionarios y servidores públicos que estén enmarcados en cumplir sus objetivos, misiones y metas.

En este sentido, cabe mencionar que en base al Art. 4 del Reglamento Para El Control De Vehículos Nacionales y Consumo Del Combustible, La Corte de Cuentas de la República verificará que para el uso los vehículos clasificados como de uso administrativo, general u operativo, se hayan emitido la correspondiente Misión Oficial, para días hábiles y no hábiles; en ese sentido, en su literal c) establece que en dicho documento debe establecerse la fecha y objetivo de la Misión y de autorización, así como el nombre del funcionario o empleados a cargo de la Misión y del motorista asignado. De igual forma, dicho cuerpo normativo establece en su Art. 11 literal d) que para el uso de vales de gasolina que llegara hacer la Institución, es menester contar con los mismos, para poder hacer uso de estos beneficios.

Por lo tanto, para garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos mencionados en el romano anterior, con la finalidad que puedan conocer las bitácoras de este vehículo ya que son bienes públicos del estado, que van enmarcados dentro de las funciones que

realizan los funcionarios públicos es procedente ordenar una nueva búsqueda de la información con respecto a la bitácora del vehículo P-19-966, documentando todas las diligencias de búsqueda de dicha información con las unidades correspondientes. En caso de no existir dicha información habiendo realizado todas las diligencias de búsqueda pertinentes, se deberá declarar la inexistencia de dicha información y entregar al apelante dicha declaratoria, junto con las diligencias de búsqueda correspondientes.

No obstante lo anterior, este Instituto advierte que las bitácoras pueden contener datos personales o información confidencial, según lo establece la LAIP; por lo que, si se llegara a encontrar dicha información se deberá entregar en versión pública, con base al artículo 30 de la LAIP, donde se deberá eliminar los elementos clasificados como confidenciales, con marcas que impiden su lectura; anonimizando los datos personales como: número de DUI, direcciones particulares y otros que fueran análogos de las personas que han intervenido en dichos actos y que permitan su individualización, de igual forma, información que sea de carácter confidencial según lo establezca la LAIP.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 18 de la Cn, 48, 94, 96 letra "d" y 102 de la LAIP, 79 y 135 de la LPA este Instituto, **resuelve:**

a) **Modificar** la resolución del oficial de información de la **Presidencia de la República**, de fecha 6 de junio de 2016, en relación a la información que no fue entregada a los apelantes.

b) **Ordenar** a la **Presidencia de la República** que, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, entregue a [REDACTED] y [REDACTED], la información concerniente al Informe sobre la misión o diligencias oficiales en las que se utilizó el vehículo oficial placas P-19-966 durante el periodo comprendido del 29 de abril al 2 de mayo del año 2016; y la información relacionada al informe sobre el Departamento o Área institucional, nombre del funcionario o persona responsable a la que estaban asignados los vehículos oficiales placas P-19-966



únicamente si estaban asignadas a personas que no entran en la categoría de “persona políticamente expuesta”, es decir el Presidente, Vicepresidente y los designados de la presidencia de la república. Si la información relacionada anteriormente está asignada a una de estas personas, se le debe hacer saber a los ciudadanos y a este Instituto, para que este último pueda confirmar lo resuelto por el oficial de información únicamente en este requerimiento.

c) **Ordenar a la Presidencia de la República** que, en el plazo de **ocho días hábiles** contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, realice una nueva búsqueda de la información consistente en *copia en versión pública de la bitácora del vehículo oficial placas P-19-966 de los días comprendidos desde el 29 de abril al 2 de mayo de 2016* con las unidades correspondientes que podrían tener la información relacionada, documentando cada procedimiento seguido. En el caso de no encontrarse la información en controversia, se deberá declarar su inexistencia, relacionando todos los medios probatorios y lo hechos que surjan en dicha diligencia.

d) **Ordenar a la Presidencia de la República** que, en el plazo de **tres días hábiles** contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo anterior, entregue a [REDACTED] y [REDACTED], la información relacionada en el literal c) de la presente resolución en versión pública, en base a lo establecido en el Art. 30 de la LAIP; y en el caso de no encontrarla, deberá entregar la declaratoria de inexistencia junto con todas las diligencias de búsqueda en el mismo plazo mencionado en este literal.

e) **Ordenar a la Presidencia de la República** que, a través de tu titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo mencionado en el literal b) de la presente resolución, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en el mencionado literal, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante y su debida recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio y la ejecución forzosa de conformidad al Art. 167 y 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

f) **Ordenar a la Presidencia de la República** que, a través de tu titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo mencionado en el literal d) de la presente resolución, , remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en el mencionado literal, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante y su debida recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio y la ejecución forzosa de conformidad al Art. 167 y 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

g) **Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

h) **Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

i) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

Notifíquese.-


PRONUNCIADO POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

JJ/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diez días del mes de agosto de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



